Constancia Secretarial: incluido el presente asunto en la lista de traslado fijada el 13 de abril de 2021, los términos para presentar alegatos de conclusión por parte de la accionante corrieron durante los días 14, 15, 16, 19 y 20 de abril de 2021; mientras que para la entidad accionada corrieron entre los días 21, 22, 23, 26 y 27 de abril de 2021, término concedido también al Ministerio Público para presentar su concepto.

Como se ve en las constancias de recepción que obran en el expediente digitalizado, la Administradora Colombiana de Pensiones presentó en término sus alegatos de conclusión y el Ministerio Público remitió su concepto. Al revisar el buzón del canal electrónico, se evidencia que la parte actora dejó transcurrir en silencio el término otorgado para tales efectos.

Pereira, 30 de abril de 2021.

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ
Secretario

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN LABORAL
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ
PEREIRA, DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO
Acta de Sala de Discusión No 70 de 10 de mayo de 2021

SENTENCIA ESCRITA

Se resuelve el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a favor de la señora **LIGIA INÉS UPEGUI DE GALEANO** en la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito el 17 de febrero de 2021, dentro del proceso que le promueve a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES**, cuya radicación corresponde al N°66001310500520190025901.

Se reconoce personería para actuar dentro del proceso de la referencia a la doctora **PAULA ANDREA MURILLO BETANCUR**, como apoderada de la Administradora Colombiana de Pensiones, en los términos y para los efectos del memorial de sustitución de poder que fue allegado al correo institucional el pasado 26 de abril de 2021, incluido debidamente en el expediente digitalizado.

ANTECEDENTES

Pretende la señora Ligia Inés Upegui de Galeano que la justicia laboral declare que tiene derecho a que se le reconozca la pensión de sobrevivientes causada con el deceso del pensionado Julio César Galeano Álvarez y con base en ello aspira que se condene a la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la prestación económica a partir del 30 de mayo de 2015, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, lo que resulte probado extra y ultra petita, además de las costas procesales a su favor.

Refiere que: el señor Julio César Galeano Álvarez falleció el 30 de mayo de 2015, momento en el que ostentaba la calidad de pensionado, debido a que el Instituto de Seguros Sociales hoy Administradora Colombiana de Pensiones le reconoció la pensión de invalidez por medio de la resolución N°4552 de 1° de julio de 1992; en esa fecha, 30 de mayo de 2015, finalizaron cincuenta y siete años de convivencia continua e ininterrumpida que habían iniciado el día en que contrajeron matrimonio por el rito católico, periodo en que procrearon veintidós hijos (cinco de ellos fallecidos y los diecisiete restantes mayores de edad a la fecha del deceso de su progenitor); a pesar de que en el año 2012, ella y el señor Julio César Galeano Álvarez se divorciaron, cesando de esa manera los efectos civiles del matrimonio católico y quedando disuelta la sociedad conyugal, la verdad es que ello no cambió en nada la relación sentimental, ya que su convivencia se mantuvo vigente hasta la fecha en que se produjo el deceso de su compañero permanente, prestándose ayuda mutua y colaboración; el 7 de diciembre de 2018 elevó solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la cual fue negada por la entidad accionada en la resolución SUB15331 de 21 de enero de 2019, decisión que fue confirmada en la resolución DPE850 de 20 de marzo de 2019.

Al dar respuesta a la acción -pag.102 a 129- la Administradora Colombiana de Pensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que la señora Ligia Inés Upegui de Galeano no cumple con los requisitos legales y jurisprudenciales para que se le reconozca la pensión de sobrevivientes que dejó causada con su deceso el señor Julio César Galeano Álvarez. Formuló las excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la obligación”, “*Prescripción*”, “*Imposibilidad jurídica para reconocer y pagar derechos por fuera del ordenamiento legal*”, “*Buena fe*”, “*Imposibilidad de condena en costas*” y “*Declaratoria de otras excepciones*”.

En sentencia de 17 de febrero de 2021, la funcionaria de primera instancia estableció que el señor Julio César Galeano Álvarez, fallecido el 30 de mayo de 2015, dejando causada la pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios al ostentar la calidad de pensionado, cumpliendo de esta manera con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

En lo concerniente al requisito de convivencia previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, sostuvo que la señora Ligia Inés Upegui de Galeano, no cumple con los requisitos exigidos en dicha normativa para acceder a la pensión de sobrevivientes, pues en primer lugar, la calidad de cónyuge que tenía frente al pensionado fallecido desapareció el 10 de octubre de 2012 cuando se divorciaron y cesaron los efectos civiles del matrimonio católico, disolviéndose también la sociedad conyugal, motivo por el que, no le quedaba otro camino que acreditar que, en calidad de compañera permanente convivió con el pensionado durante los últimos cinco años anteriores a su deceso, no obstante, como ella misma lo confesó en el interrogatorio de parte, tal situación no se presentó, ya que la convivencia entre ellos se rompió en el año 2008 cuando la accionante decidió iniciar una nueva relación sentimental.

Por las razones expuestas negó la totalidad de las pretensiones de la acción incoada por la señora Ligia Inés Upegui de Galeano y la condenó en costas procesales a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones.

No hubo apelación de la sentencia, por lo que, al haber resultado completamente desfavorable a los intereses de la parte actora, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta a su favor.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Conforme se dejó plasmado en la constancia emitida por la Secretaría de la Corporación, la Administradora Colombiana de Pensiones hizo uso del derecho a presentar en término alegatos de conclusión, respecto de los cuales, teniendo en cuenta que el artículo 279 del CGP dispone que *“No se podrá hacer transcripciones o reproducciones de actas, decisiones o conceptos que obren en el expediente.”*, baste decir que los argumentos emitidos allí, coinciden con los expuestos en la

contestación de la demanda, solicitando en consecuencia que se confirme en su integridad la sentencia proferida por la *a quo*.

Por su parte, la parte actora dejó transcurrir en silencio el término otorgado para alegar en esta sede.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Estando dentro del término otorgado, el Ministerio Público por medio del Procurador 34 Judicial II para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social con sede en Pereira, emitió su concepto frente al caso, exponiendo que más allá de que el señor Julio César Galeano Álvarez dejó causada la pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios, lo cierto es que la señora Ligia Inés Upegui de Galeano no tiene derecho a que se le reconozca la prestación económica, por cuanto ella dejó de tener la calidad de cónyuge del pensionado desde el 10 de octubre de 2012 cuando cesaron los efectos civiles del matrimonio católico y se liquidó la sociedad conyugal que se formó entre ellos; demostrándose con el interrogatorio de parte de la accionante, que entre ellos no existió convivencia en los últimos cinco años anteriores al deceso del señor Galeano Álvarez; motivo por el que solicita que se confirme la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito.

Atendidas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los siguientes:

PROBLEMAS JURÍDICOS

¿Tiene derecho la señora Ligia Inés Upegui de Galeano a que se le reconozca la pensión de sobrevivientes causada con el deceso del pensionado Julio César Galeano Álvarez?

Con base en la respuesta dada al interrogante anterior ¿Hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda?

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala considera necesario precisar, el siguiente aspecto:

REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITAR LAS COMPAÑERAS PERMANENTES DEL PENSIONADO FALLECIDO PARA SER BENEFICIARIAS DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES EN VIGENCIA DE LA LEY 797 DE 2003.

Es posición pacífica de la jurisprudencia considerar que la norma que rige las pensiones de sobrevivientes es la vigente al momento en el que se produce el fallecimiento del causante.

Tiene dicho la Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias de 20 de mayo de 2008 con radicación N°32.393, de 22 de agosto de 2012 con radicación N°45.600 y de 13 de noviembre de 2013 radicación N°47.031, en lo concerniente a los requisitos exigidos a los cónyuges y a los compañeros permanentes en los artículos 47 y 74 de la ley 100 modificados por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, que el requisito de la convivencia al momento del deceso del causante es indispensable para definir el derecho de los beneficiarios.

En cuanto a los compañeros permanentes, en tratándose de reclamaciones de sobrevivencia ocasionadas por la muerte de una pensionada, es clara la ley y ha sido pacífica la jurisprudencia del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria laboral -que, en este supuesto fáctico, nada cambió con los razonamientos vertidos en la reciente sentencia SL1730 de 3 de junio de 2020- en sostener que de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, les corresponde acreditar una convivencia con la pensionada fallecida igual o superior a los últimos 5 años anteriores a la fecha en que ocurrió el deceso.

CASO CONCRETO

Como se ve en el expediente administrativo allegado por la Administradora Colombiana de Pensiones y que obra en el expediente digitalizado del proceso, el Instituto de Seguros Sociales por medio de la resolución N°04552 de 11 de diciembre de 1992, le reconoció al señor Julio César Galeano Álvarez la pensión de invalidez a partir del 17 de julio de 1992; por lo que de acuerdo con lo establecido en el numeral 1° del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, con su deceso ocurrido el 30 de mayo de 2015 dejó causada la pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios.

Ahora bien, como se aprecia en el registro civil de matrimonios emitido por la Notaria Segunda del Círculo de Pereira -pag.58 y 59 del expediente-, el señor Julio César Galeano Álvarez y la señora Ligia Inés Upegui González contrajeron matrimonio católico el 4 de octubre de 1955, sin embargo, en ese mismo documento existe nota en la que se registra que los otrora contrayentes, por medio de escritura pública N°2246 elevada ante el Notario Primero del Círculo de Cartago, se divorciaron el 10 de octubre de 2012, cesando de esa manera los efectos civiles del matrimonio católico, quedando disuelta y liquidada la sociedad conyugal que se había formado entre ellos.

A pesar de ello, sostiene la demandante en el libelo introductorio, que la convivencia entre ellos no sufrió ninguna alteración, ya que la misma se mantuvo vigente durante cincuenta y siete años que finalizaron el 30 de mayo de 2015 cuando el señor Galeano Álvarez falleció.

Con el objeto de dar luces sobre las afirmaciones efectuadas en la demanda, la parte actora solicitó que fueran escuchados los testimonios de los señores Elio Fabio Jaramillo y Gilberto Calderón Cuervo.

El señor Elio Fabio Jaramillo manifestó que conoció al señor Julio César Galeano Álvarez desde muchísimos años atrás, cuando fueron compañeros de trabajo en un trapiche, momento en el que se dio cuenta que él estaba casado con la señora Ligia Inés Upegui de Galeano; a continuación explicó que fue constante su relación de amistad con ellos durante unos ocho años aproximadamente, pero que una vez dejó de trabajar en el trapiche, no los volvió a ver sino después de unos diez años; en ese momento, reestablecieron su relación de amistad en el municipio de Obando, en donde todos tenían su residencia, pero hace unos cuantos años volvió a desconectarse de ellos, ya que Julio César y Ligia Inés se fueron para Cartago, desconociendo que fue lo que pasó con ellos en los últimos años de vida del señor Galeano Álvarez, al punto que fue mucho tiempo después de su deceso que se había dado cuenta de ese infortunio.

Por su parte, el señor Gilberto Calderón Cuervo, dijo que ha vivido toda su vida en el municipio de Obando, expresando que cuando tenía dieciocho años conoció al señor Julio César Galeano Álvarez, debido a que ambos fueron compañeros de trabajo en un trapiche; desde esa época se dio cuenta que la señora Ligia Inés

Upegui de Galeano era su esposa y por tanto la persona con la que convivía junto con sus hijos; al cabo de los años, debido a que su hijo Gilberto Calderón Giraldo era el esposo de la hija menor del pensionado fallecido y la demandante, pudo constatar que Julio César ya no convivía con la señora Ligia Inés, pues precisamente él se fue a vivir a la casa de su hijo y nuera, situación que se presentó aproximadamente en el año 2010.

Al absolver el interrogatorio de parte, la señora Ligia Inés Upegui de Galeano inició su relato ratificando lo expuesto en los hechos de la demanda, esto es, que a pesar de que ella y el señor Julio César Galeano Álvarez se separaron en el año 2012, su convivencia no se vio afectada, ya que ella se mantuvo vigente hasta el 30 de mayo de 2015 cuando él falleció; ante lo dicho por la actora, la directora del proceso le llamó la atención, recordándole que se encontraba bajo la gravedad de juramento, motivo por el que la exhortó a decir la verdad; en ese momento, la señora Upegui de Galeano se sinceró y manifestó que realmente la relación sentimental entre ella y el señor Julio César Galeano Álvarez se rompió en el año 2008, debido a que ella inició una relación sentimental con el señor Eusebio Gallego, quien desde esa época hasta unos seis meses antes de fallecer Julio César, la tuvo afiliada como su beneficiaria en salud; confesando adicionalmente que durante ese periodo no existió convivencia entre ella y el causante.

Conforme con lo expuesto, demostrado quedó en el proceso, que la relación sentimental que sostenían el señor Julio Cesar Galeano Álvarez y la señora Ligia Inés Upegui de Galeano se rompió en el año 2008 cuando la demandante decidió iniciar una nueva relación con el señor Eusebio Gallego, interrumpiéndose a partir de ese momento una convivencia continua e ininterrumpida que había iniciado el 4 de octubre de 1955; situación ésta de la que tuvo conocimiento el testigo Gilberto Calderón Cuervo, quien en su narración informó que aproximadamente en el año 2010 supo que el causante había dejado de convivir con la señora Upegui de Galeano, ya que el pensionado fallecido se había ido a vivir con su hija menor y su esposo Gilberto Calderón Giraldo (hijo del testigo).

Es que nótese que todo lo acontecido desde el año 2008, esto es, la ruptura en la convivencia entre los otrora cónyuges fue lo que finalmente generó que el señor Julio César Galeano Álvarez y la señora Ligia Inés Upegui de Galeano decidieran divorciarse el 10 de octubre de 2012, cuando suscribieron la escritura pública

Nº2246 ante el Notario Primero del Círculo de Cartago, cesando de esa manera los efectos jurídicos del matrimonio católico, quedando disuelta y liquidada la sociedad conyugal existente entre ellos; sin que en momento algún se reactivara la convivencia entre el causante y la accionante.

Por lo expuesto, no queda duda en que la señora Ligia Inés Upegui de Galeano no acreditó el requisito de convivencia exigido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada con el deceso del pensionado Julio César Galeano Álvarez; razón por la que se confirmará en su integridad la decisión adoptada por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito el 17 de febrero de 2021

Sin cosas en esta sede.

En mérito de lo expuesto, la **Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

CONFIRMAR en su integridad la sentencia que por consulta se ha conocido.

Sin costas en esta sede.

Notifíquese por estado y a los correos electrónicos de los apoderados de las partes.

Quienes integran la Sala,

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ
Magistrado Ponente

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
Magistrada

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO
Magistrado

Sin constancias ni firmas secretariales conforme artículo 9 del Decreto 806 de 2020

Firmado Por:

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
DESPACHO 2 SALA LABORAL TRIBUNAL SUPERIOR PEREIRA

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
DESPACHO 1 SALA LABORAL TRIBUNAL SUPERIOR PEREIRA

GERMAN DARIO GOEZ VINASCO
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL 003 SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD
DE PEREIRA-RISARALDA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

722558245c9f097a3be1ff49caab6ffae2f206432f3fd2e346913219a0fffeb5

Documento generado en 12/05/2021 07:12:02 AM